



Antonio Abril

## FIRMA INVITADA

## La reforma que se nos viene encima

Uno de los grandes avances que se produjo durante la democracia tuvo lugar en el ámbito de la educación, que se hizo universal, y, por supuesto, pública y equitativa, con un gran incremento de centros y de profesorado, con la práctica escolarización de todos alumnos y alumnas desde los 3 años, con la ampliación de la etapa obligatoria, con la instauración de diferentes programas de compensación y con la creación de la universidad, que posibilitaba un acceso de nuestros alumnos a los estudios superiores.

Y decimos que fue un avance porque los recortes aplicados y los que, a tenor de los presupuestos, se van a seguir aplicando nos llevan a un inevitable retroceso, ya que han supuesto el despido de miles de docentes, que continuará, la eliminación de todos los programas de compensación, la práctica desaparición de la formación permanente del profesorado, la precarización de la función docente (más horario lectivo, menos retribuciones, sustitución de bajas sólo a partir del décimo día), la masificación de las aulas (brutal aumento del 20% de la ratio alumnado-aula) que tendrán una grave repercusión en la calidad educativa, las dificultades que tendrán nuestros universitarios de acceder a los estudios superiores por el incremento de las tasas y las duras condiciones a las que tendrán que hacer frente para ser beneficiarios de una beca, así como la problemática ante la que se van a encontrar para que nuestra universidad pueda ofrecer unos estudios de calidad, después de que los presupuestos ahoguen a la universidad con 32 millones de euros menos de los que ésta necesita para subsistir.

Pero, no contentos con este desmantelamiento del sistema educativo, ahora nos presentan un Anteproyecto de Ley de Educación, que sí va a llevar el pomposo título de "mejora de la calidad", no siendo más que un cúmulo de actuaciones en sentido contrario a todos los criterios pedagógicos actuales, excepto a los de nuestro "querido" ministro.

En primer lugar, el anteproyecto ratifica la poca profesionalidad que, a su juicio, merecen nuestros docentes, no se fía de las decisiones de los equipos didácticos que trabajan diariamente y durante varios años con nuestros alumnos, ya que la continuidad de los mismos en los estudios dependerá de la evaluación que se haga al final de las etapas; evaluación que realizarán, por supuesto, agentes externos que, en unas pocas horas, decidirán si el alumno o alumna puede seguir sus estudios o debe repetir. Con la instauración de las *reválidas*, rememoración de otros tiempos, al final de cada etapa, quitan seguridad en su trabajo a nuestros docentes y convierten los estudios en una carrera de obstáculos para nuestros alumnos y alumnas.

Después se jactan de la importancia que quieren otorgarle sólo a las asignaturas instrumentales en detrimento de las demás; y no es *pecata minuta*, pues esto, unido al adelanto de los itinerarios que, más que intentar reducir el abandono y fracaso escolar, va a eliminar progresivamente tanto la igualdad de oportunidades como la formación común durante la etapa obligatoria lo que, sumado a la pronta selección de alumnos, supondrá que habrá muchos alumnos y alumnas cuya formación va a ser la de las cuatro reglas, es decir, futura mano de obra barata para un mercado laboral precario. A cualquier padre o, mejor dicho, a cualquier

ciudadano, esto le debe producir escalofríos. Y por supuesto, serán las clases más desfavorecidas y con más falta de apoyo las que tienen las mayores posibilidades de nutrir esta precaria formación.

Otro elemento absolutamente negativo que se quiere introducir en los centros es una injusta competitividad, pues van a establecer pruebas externas, cuya publicación determinará un ranking de centros. La diversidad de los centros y el entorno desfavorecido en el que muchos tienen que trabajar hace injustificable la publicación de unos resultados que no habrán podido valorar parámetros fundamentales, como es el entorno social del centro, lo que convertirá la elección de centros en un "mercado" para los padres; lógico, por otro lado, y será una pescadilla que se muerde la cola; pues, mientras unos centros "progresarán adecuadamente" y serán recompensados, otros se convertirán en auténticos guetos, donde irán los alumnos y alumnas desechados por los anteriores centros y, para que esto ocurra, darán facultades de selección a los directores que, como veremos más adelante, los elegirá la Administración.

La resurrección de estas viejas fórmulas se complementa con una nueva forma de gestionar los centros públicos según las recetas de la empresa privada: mediante una mayor autonomía financiera que requiera de fuentes de financiación privadas ante la insuficiencia de la financiación pública; financiación externa de patrocinadores que impondrán sus logotipos y exigencias, introduciendo los intereses privados y mercantiles en la educación pública. A ello se añade la especialización de los centros para ofrecer una oferta competitiva y "diferenciada" a la clientela; así como la "profesionalización" de la dirección escolar como gerentes, expertos en gestión empresarial y de recursos humanos, que gestionarán los centros educativos públicos de forma "eficiente" y con rentabilidad económica, para lo que el director será prácticamente designado por la administración, ya que se reserva el 70% de la evaluación para su selección y éste podrá contratar y echar "razonadamente" al docente que quiera.

Pero, además, no contentos con estas nuevas "razonadas y consensuadas propuestas", la administración podrá asignar a los docentes funciones en etapas distintas a la suyas, así como enseñanzas distintas a las de su especialidad e incluso los podrán trasladar, independientemente de que tengan destino definitivo o no, de centro sin límite de extensión, pudiendo modificarles la adscripción de sus puestos de trabajo.

Por todo lo que se nos viene encima, FETE-UGT pide, ahora más que nunca, que la comunidad educativa aúne esfuerzos y comparta iniciativas contra estas políticas educativas del PP, que suponen el ataque más grave al sistema educativo desde la transición, que nos retrotrae al modelo de escuela franquista y que, con la excusa de la crisis, pretende convertir la educación pública en una red subsidiaria y asistencial, mientras potencia e impulsa el negocio privado en la educación. Nos jugamos el futuro de nuestros hijos e hijas y el de la sociedad en su conjunto.

Lorenzo Prado Cárdenas.  
Secretario General de FETE-UGT  
Castilla-La Mancha

## CARTAS DEL DIRECTOR

## Molina, el futuro que no llega

Cual Conde de Romanones, les podía haber ofrecido, además de la autovía en la que iban a convertir la N-211, del Parador y de no sé cuántas cosas más, pues... una playa o una estación de esquí. En el fragor de la campaña electoral –en el transcurso de un mitin en Guadalajara– y siendo él –Rodríguez Zapatero– de natural optimista y ocurrente, pocas cosas hubieran sido más extrañas.

La autovía a la vuelta de unos meses menguó a vía rápida, ahora ya, a la vuelta de unos años, poco o nada sabemos de ella. Y –al menos que yo haya oído– tampoco nadie dice nada, ni nadie pregunta el respecto.

Por su parte, el parador va perdiendo camas a la vez que discurre por un camino que no encuentra el final. Mientras las gentes del Señorío lo demandan y piden –que para eso se lo prometieron– porque están convencidos de que, con él, un futuro económico mucho mejor sería posible en la zona. Otra cosa es que una vez construido, tantas esperanzas como hay depositadas en él se convirtieran en realidad. Según el panorama actual, cualquier duda al respecto parece totalmente razonable. Dada la marcha económica que llevan los paradores nacionales en los últimos ejercicios, acumulando pérdidas uno tras otro, ¿qué razones habría para pensar que en Molina de Aragón podría ser distinto? Lo cierto es que pocas o ninguna. Aunque no es extraño que los habitantes de la zona se aferren a ese proyecto como a un clavo ardiendo pues, si no, qué otra alternativa les queda.

Lo triste es que los representantes políticos del momento repararan en Molina –una zona absolutamente deprimida, económica y socialmente– en el fragor de una campaña electoral, tras el terrible incendio que asoló a la zona, y con unas propuestas como sacadas de una chistera mágica, capaz de convertir lo negro en blanco en tan solo un chascar de dedos. Evidentemente que coincidían con unas demandas históricas de la zona, qué menos. Otra cosa es que eso sea lo que Molina y su comarca necesitan o que no haya alternativas mejores –se dice que lo mejor es enemigo de lo bueno–. En cualquier caso Molina merece mucho más que un calentón electoral. Casi era presumible que todo quedara en nada. Como está quedando.

Después o, mejor dicho, ahora, con el nuevo Gobierno... ¡no hay dinero para hospitales, cómo para gastarlo en paradores, que están perdiendo dinero y pensando en despedir gente!